

C.A. de Temuco  
Temuco, seis de octubre de dos mil veintidós.  
VISTOS

Que, en causa RIT O-194-2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, con fecha 9 de junio de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva por el Juez Titular, doña Marta Paola Alvarez Basáez, en virtud de la cual acogió la demanda deducida por Rubén Alvaro Silva Mora, Víctor Galarce Fuentes y doña Erika del Carmen San Martín Campos, en contra de la Ilustre Municipalidad de Padre Las Casas, representada por su Alcalde don Mario González Rebolledo, en cuya virtud se le condenó en los siguientes términos.

I.- Que SE ACOGE la demanda interpuesta por don RUBEN ALVARO SILVA MORA, cedula nacional de identidad número seis millones quinientos doce mil ciento cuarenta y seis guion ocho, don VICTOR GALARCE FUENTES, cedula de identidad número siete millones veintidós mil setecientos cuatro guion cinco y doña ERIKA DEL CARMEN SAN MARTIN CAMPOS, cedula de identidad número ocho millones cuatrocientos treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta y seis guion seis, en contra de la Ilustre Municipalidad de Padre Las Casas, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por su alcalde don Mario Hernán González Rebolledo y en consecuencia se ordena a la demandada a pagar a los actores ya individualizados las remuneraciones de los meses de enero y febrero cuyo total se indica en cada caso:

Don RUBEN ALVARO SILVA MORA: \$3.050.896.

Don VICTOR GALARCE FUENTES: \$2.656.696

Doña ERIKA DEL CARMEN SAN MARTIN CAMPOS: \$3.712.412

II.- Que las referidas cantidades serán reajustadas y devengarán intereses en la forma

prevista en el artículo 63 del Código del Trabajo

III.-Se condena en costas a la demandada por resultar completamente vencida y se

fijan estas prudencialmente en la cantidad de \$400.000

En contra del referido fallo, el abogado Carlos Fonseca Ávila, en representación de la parte demandada, dedujo recurso de nulidad fundado en la causal contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo.

Señala que encontrándose dentro de plazo y en uso del derecho que me confiere el artículo 477 del Código del Trabajo interpone recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva de fecha 9 de junio de 2022,



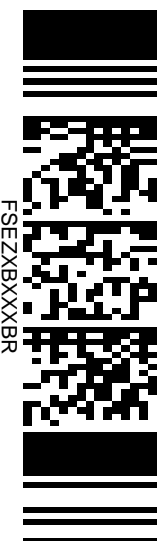
dictada por la Sra. Marta Paola Álvarez Basaez, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, la cual acogió la demanda interpuesta por el Sr. RUBEN ALVARO SILVA MORA, Sr. VICTOR GALARCE FUENTES y ERIKA DEL CARMEN SAN MARTIN CAMPOS en contra de su representada MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS, que ordena a la demandada a pagar a los actores ya individualizados las remuneraciones de los meses de enero y febrero cuyo total se indica en cada caso; fundado el presente recurso de nulidad, en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por haberse dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, con el objeto que se declare admisible el presente recurso y lo remita a la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, para que ésta, previo examen de admisibilidad, conociendo del presente recurso, lo acoja y, con su mérito, anule la sentencia recurrida y dicte una de reemplazo que rechace la demanda en todas sus partes, con expresa condena en costas, por los siguientes fundamentos:

Refiere en cuanto antecedentes previos que los demandantes, que eran docenes del sector municipal, de la Comuna de Padre las Casas, se acogieron al beneficio de retiro voluntario contemplado en el artículo primero de la ley 20.976, beneficio que se otorga siempre que ellos comuniquen su decisión de renunciar voluntariamente y hagan efectiva dicha renuncia respecto del total de horas que sirven, en los plazos que fija la ley.

Indica que lo señalado, ocurrió en tiempo y forma y la Municipalidad de Padre las Casas puso a disposición la respectiva bonificación y término de relación laboral con fecha 31 de diciembre de 2021.

Refiere que la parte demandante señala que el pago, el cese de las funciones y el termino de la relación laboral, se ajustó a derecho. Pero que no se cumplió con el mandato que surge de la aplicación del artículo 3 de la ley 20976, en relación al artículo 4 de la ley 20822, en relación al artículo 82 o 41 bis del decreto con fuerza de ley N° 1, del año 1997, del ministerio de educación, que señala “Los profesionales de la educación con contrato vigente al mes de diciembre, tendrán derecho a que éste se prorrogue por los meses de enero y febrero, siempre que el profesional de la educación tenga más de 6 meses continuos de servicios para el municipio o corporación educacional municipal.”

En razón de lo anterior los demandantes solicitan que se le paguen las



remuneraciones de los meses de enero y febrero del año 2022.

Por su parte Municipalidad de Padre las Casas sostiene que para tener derecho a la prórroga solicitada por la demandante en autos (enero y febrero), es necesario que el servidor se encuentre incorporado a la dotación docente en calidad de contratado o contrata, es decir, que se vincule a un municipio a través de alguna de las modalidades de contrato contempladas en el artículo 25 de la ley 19070, para cumplir labores transitorias, de remplazo de titulares, optativas, experimentales o especiales. En tal sentido, advierte que los demandantes no se encontraban incorporados en la dotación docente a través de alguna de las modalidades de contrato contempladas en el artículo 25 de la ley 19.070, para cumplir labores transitorias, de reemplazo de titulares, optativas, experimentales o especiales, puesto que las horas que servían tenían la calidad de titulares.

Por tanto, los demandantes al SER DOCENTES DESIGNADOS EN CALIDAD DE TITULARES, no cumplen con lo exigido en el artículo 41 bis de la ley 19070, por lo que no procede la prórroga de su contratación por los meses de enero y febrero de 2022.

En casos idénticos Contraloría General de la República en dictámenes N° 29812/2018 y N° 90256/2022 ha resuelto de la misma forma, que sólo procede esta prórroga cuando el docente está incorporado a la dotación docente, a través de una modalidad para cumplir labores transitorias. Y en este caso los DOCENTES ERAN TITULARES. No obstante, nuestra defensa, indica, el tribunal acogió la teoría de la demandante.

Plantea que respecto de la causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo por haberse dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo:

Tal como dispone la jurisprudencia de los Tribunales (así, sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso dictada el 1 de abril de 2016, rol 2-2016), “la infracción de ley se produce cuando se falla contra texto legal expreso, cuando al momento de dictar sentencia se aplica una norma que no es atinente para resolver el caso o cuando no se aplicó una norma legal que servía para resolver el conflicto.”

En el caso en comento, respecto de las infracciones que referiremos con el numeral 1 se reprocha a la sentenciadora, el no haber aplicado la norma legal que servía para resolver el conflicto y, respecto de la infracción que signaremos con el numeral 2, el reproche se dirigirá a haber fallado contra texto legal expreso.



1.- Infracción al artículo 25, en relación con el artículo 41 bis de la ley 19.070, en relación al artículo 19 del Código civil, como también al artículo 7 de la Constitución Política y 2º de la Ley Bases Generales de la Administración del Estado.

Artículo 41 bis de la Ley 19.070 que dispone:

Los profesionales de la educación **CON CONTRATO VIGENTE AL 1 DE DICIEMBRE**, tendrán derecho a que éste se prorrogue por los meses de enero y febrero o por el periodo que medie entre dicho mes y el día anterior al inicio del año escolar siguiente, siempre que el profesional de la educación tenga más de 6 meses continuos de servicios para el mismo municipio.

Artículo 25 de la Ley 19.070 que dispone:

Los profesionales de la educación se incorporan a una dotación docente en calidad de titulares o en calidad de contratados.

Son titulares los profesionales de la educación que se incorporan a una dotación docente previo concurso público de antecedentes.

Tendrán calidad de contratados aquellos que desempeñan labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titulares.

Constitución Política del República Artículo 7º.-

Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.

Ley de Bases de la administración del Estado Artículo 2º.-

Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes.

Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico.

Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes.



El sentido de las normas recién transcritas no deja lugar a dudas: La Municipalidad de Padre las Casas, debe obligatoriamente ceñirse a su obligación de respetar la ley, en cuanto a su actuar y funcionamiento, de ello se desprende claramente el marco legal en el cual se desarrolló la relación contractual con el demandante y que no es ajeno a ninguna de las partes.

No hay entonces más alternativas: VS. Ilma., en casos idénticos Contraloría General de la República en dictámenes N° 29812/2018 y N° 90256/2022 ha resuelto de la misma forma, que sólo procede esta prórroga cuando el docente esta incorporado a la dotación docente, a través de una modalidad para cumplir labores transitorias. Y en este caso los DOCENTES ERAN TITULARES.

El sentenciador, como pasa a explicar, funda el punto de partida de su razonamiento, lo que condicionará sus conclusiones, en el artículo 1 y 3 de la ley 20976, en relación con el artículo 4 de la ley 20822. Señalando que se reúnen los requisitos para aplicar el artículo 41 bis de la ley 19070.

De esta manera y de un modo evidente, la sentencia que aquí se reprocha, no aplicó la normativa legal que servía para resolver el conflicto de autos.

SEXTO: que se discute si a los demandantes les corresponde el pago de las remuneraciones de los meses de enero y febrero del año 2022 en atención a lo dispuesto en el artículo 41 bis del DFL N°1 del año 1997 del Ministerio de Educación.

Que el referido artículo dispone:

Artículo 41 bis.- Los profesionales de la educación con contrato vigente al 1 de diciembre, tendrán derecho a que éste se prorrogue por los meses de enero y febrero o por el período que medie entre dicho mes y el día anterior al inicio del año escolar siguiente, siempre que el profesional de la educación tenga más de seis meses continuos de servicios para el mismo municipio o corporación educacional municipal y Servicios Locales de Educación Pública.

El referido artículo está inserto en el título IV del estatuto docente, esto es de la dotación docente y el contrato de los profesionales de la educación del sector municipal y dentro del párrafo tercero: derechos del personal docente.

Que se determinó como hechos no discutidos que de acuerdo a los decretos los actores estaban designados como docentes titulares para la Municipalidad de Padre las Casas.



SÉPTIMO: Que el artículo 1 de la ley 20.976 que permite a los profesionales de la educación que indica, entre los años 2016 y 2025 acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley 20.822 dispone:

"Artículo 1º.- Los profesionales de la educación que pertenezcan a una dotación docente del sector municipal, administrada directamente por las municipalidades o por corporaciones municipales, ya sea en calidad de titulares o contratados, o estén contratados en los establecimientos regidos por el decreto ley N° 3.166, del Ministerio de Educación Pública, promulgado y publicado el año 1980, y que entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2024, ambas fechas inclusive, cumplan 60 años de edad si son mujeres, o 65 años de edad si son hombres, podrán acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley N° 20.822 (en adelante "la bonificación") hasta por un total de 20.000 beneficiarios, siempre que comuniquen su decisión de renunciar voluntariamente y hagan efectiva dicha renuncia respecto del total de horas que sirven en los organismos antes señalados, en los plazos que fijan esta ley y el reglamento. Asimismo, podrán acceder a la bonificación los profesionales de la educación que pertenezcan a una dotación docente de las instituciones señaladas en el inciso anterior o estén contratados en los establecimientos regidos por el citado decreto ley N° 3.166, de 1980, que antes del 1 de enero de 2016 hayan cumplido 60 o más años de edad si son mujeres, y 65 o más años de edad si son hombres, siempre que accedan a un cupo de los señalados en el inciso precedente, y hagan efectiva su renuncia en los plazos fijados en la presente ley y el reglamento.

La bonificación establecida en esta ley regirá para todos los profesionales de la educación señalados en los incisos anteriores, hayan o no hecho uso de la opción establecida en el artículo quinto transitorio de la ley N° 20.903”.

El artículo 3 de la misma ley establece:

Artículo 3º.- A los profesionales de la educación que accedan a un cupo de la bonificación por retiro voluntario se les aplicará lo dispuesto en el artículo 4º de la ley N° 20.822.

Por su parte la ley 20.822 que otorga a los profesionales de la educación que indica una bonificación por retiro voluntario, dispone en su artículo 4:

Artículo 4º.- Los profesionales de la educación que, a las fechas señaladas en el artículo 2º, se encuentren en la situación descrita en los artículos 41



bis u 82 del decreto con fuerza de ley N°1, de 1997, del Ministerio de Educación, mantendrán su derecho a prórroga de la relación laboral y al pago de sus remuneraciones por el período en que estas últimas disposiciones señalan.

OCTAVO: Que del análisis de la normativa recién expuesta, en el caso de los actores, quienes se acogieron a la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley 20.822, cuyos contratos se encontraban vigentes a diciembre de 2021 tal como reconocieron los testigos de la demandada, que los actores estaban designados como docentes titulares para la Municipalidad de Padre las Casas, más de seis meses continuos de servicios para el mismo municipio, se desprende que se reúnen los requisitos previsto en el artículo 41 bis del DFL n°1 que Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley n° 19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican en relación con el artículo 4 de la ley 20.822, por lo que se hace procedente acoger la demanda en la forma solicitada, disponiendo el pago de las remuneraciones de los meses de enero y febrero de 2022 a cada uno de los actores, conforme a la liquidación de remuneraciones del mes de diciembre de 2021 de cada uno de ellos don Rubén Silva Mora:

\$1.525.448, don Víctor Galarce Fuentes: \$1.328.348 y doña Erika Del Carmen San Martin Campos: \$1.856.206.

Indica que no hay entonces más alternativas , el error basal y fundamental en que incurre el Juez ad-quo, consiste simplemente en olvidar que la entidad demandada no es una empresa privada, sino que se trata de un órgano público y que, por consiguiente, se rige por el Principio de Juridicidad estricta consagrado en el artículo 7 de la Constitución Política y 2° de la LBGAE, conforme se dijo, y no por la autonomía de la voluntad que consagra el artículo 12 del Código Civil.

Que además nosotros obedecemos a la Contraloría General de la República y sus interpretaciones, que supervigilan nuestro actuar.

Con la interpretación de Usía, en primera instancia vulnera el claro texto del artículo 41 bis, el cual es sólo aplicable a los profesionales contratados y no a los profesionales titulares.

Dicha vulneración estriba en que hace aplicable a profesionales titulares, como son los demandantes, el artículo 41 bis, destinado, como se dijo, a profesionales contratados.

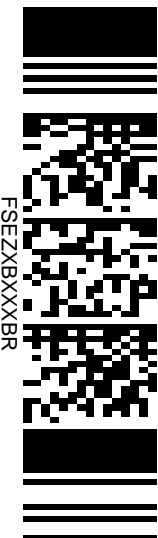
Así, al aplicar extensivamente el artículo 41 bis, lo infringió e incurrió en



error de Derecho que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues, si lo hubiera interpretado y aplicado correctamente, habría concluido que los demandantes no tienen derecho a la remuneración de los meses de Enero y Febrero, por tratarse de profesionales titulares y no "con contrato vigente"

De igual modo, infringió el inciso 10º del artículo 9 transitorio de la ley 20.501, norma que dispone que "El término de la relación laboral sólo se producirá cuando el empleador ponga la totalidad de la bonificación que corresponda a disposición del profesional de la educación que haya renunciado al total de las horas que sirve."

De la norma transcrita, se infiere que la regla general es que el término de la relación se produzca al momento de pagar la bonificación -misma norma contempla el inciso 3º del artículo 10 transitorio de la preceptiva citada-. Luego, la norma del artículo 11 transitorio





pasa a ser una excepción, al remitirse al artículo 41 bis que autoriza la extensión del contrato, vale decir de la relación, a los meses de Enero y Febrero.

De este modo, la regla del artículo 11 aludido, al ser excepcional, debe interpretarse restrictivamente y aplicarse sólo a aquellos que se encuentren en la hipótesis del artículo 41 bis, esto es profesionales "con contrato vigente" al mes de Diciembre.

No debemos olvidar que la distinción entre profesionales titulares y profesionales contratados o "con contrato", es una distinción que formula la propia ley 19.070, y esa distinción marca toda la preceptiva de dicho Estatuto. Una de las normas en que se refleja dicha distinción es, precisamente, el artículo 41 bis, el que sólo es aplicable a los profesionales a contrata, contratados o con contrato, y no a los titulares, ya que éstos, al ser titulares, dueños sin límite de tiempo de las horas que desempeñan, no necesitan de una norma que les prorrogue su nombramiento.

A su vez, el sentenciador vulneró el artículo 19 del Código Civil, al desatender el claro tenor de los artículos 41 bis y 9 transitorio inciso 10° citados, dándole, al primero, un alcance del que carece, e ignorando el segundo.

De este modo, si el sentenciador se hubiera atendido al sentido claro de la ley, como lo dispone el artículo 19 del Código Civil, habría llegado a la conclusión opuesta a la que arribó en la sentencia, ya que, entendiendo y aplicando correctamente los artículos 41 bis e inciso 10° del artículo 9 transitorio, habría llegado a la conclusión de que es improcedente el pago de remuneraciones por los meses de Enero y Febrero de 2002 para los profesionales titulares, como los demandantes.

Así, el sentenciador, con los argumentos referidos, infringió los artículos 41 bis de la ley 19.070, el inciso 10° del artículo 9 transitorio de la ley 20.501, en cuanto extendió el primero más allá de sus límites e ignoró el segundo, lo que lo lleva a aplicar, en la resolución del



asunto, una normativa inaplicable y a dejar de aplicar la atingente. Igualmente, infringió el inciso 1' del artículo 19 del Código Civil, al no aplicarlo.

Estas infracciones configuran la causal de nulidad prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo, en cuanto en la dictación de la sentencia se infringieron las normas legales indicadas, lo que, como se ha relacionado, influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Indica que de lo expuesto precedentemente, se concluye que el pago de enero y febrero de 2022 no corresponde realizarse a los trabajadores mencionados, porque son funcionarios titulares y no a contrata.

En efecto, si leemos con detención el contenido normativo del art. 41 bis del Estatuto Docente, establece que “...los profesionales de la educación con contrato vigente al mes de diciembre tendrán derecho a que este se prorrogue por los meses de enero y febrero o por el período que medie entre dicho mes y el día anterior al inicio del año escolar siguiente, siempre que el docente tenga más de seis meses continuos de servicios para el mismo municipio o corporación educacional municipal...”

Por lo que, la adecuada interpretación normativa en el punto es que, para tener derecho a la indicada prórroga, es necesario que el servidor se encuentre incorporado a la dotación docente, (cuerpo de profesores de los distintos establecimientos de la comuna), en calidad de contratado, es decir, que se vincule a un municipio a través de alguna de las modalidades de contrato contempladas en el artículo 25 de la ley N° 19.070, para cumplir labores transitorias, de reemplazo de titulares, optativas, experimentales o especiales; que cumpla con una permanencia de más de seis meses continuos de servicios; y, finalmente, que dicha contratación se encuentre vigente al mes de diciembre respectivo.

Así, se advierte preliminarmente que para el Estatuto Docente existen categorías contractuales que otorgan ciertas prerrogativas asociadas



justamente a una determinada calidad jurídica contractual, atribución de la cual no gozaban los recurrentes, toda vez que ellos tenían la CALIDAD JURIDICA DE DOCENTES TITULARES.

Lo anterior lo describe justamente el art. 25 del Estatuto Docente, que distingue entre docentes titulares y contratados:

Artículo 25.- Los profesionales de la educación se incorporan a una dotación docente en calidad de titulares o en calidad de contratados.

Son titulares los profesionales de la educación que se incorporan a una dotación docente previo concurso público de antecedentes.

Tendrán calidad de contratados aquellos que desempeñen labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titulares.

Podrá apreciar SS Iltma que, los recurrentes NO TENÍAN CALIDAD DE CONTRATADOS, pues se trata de docentes que fueron reconocidos por sucesivas leyes de mejoramiento docente que les atribuyó una calidad superior y de ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y MEJORAS REMUNERATORIAS.

Así las cosas, a mayor abundamiento, el legislador, advirtiendo las distintas categorías contractuales que existen en el ámbito docente municipal estableció un mecanismo mediante la Ley N°19.648/1999, modificada por ley N°21.152/2019, donde se faculta ACCEDER A LA CALIDAD DE TITULAR concurriendo ciertos requisitos, a saber: "Artículo único.- Concédese, por única vez, la calidad de titulares de la dotación docente dependiente de un mismo Municipio, Corporación Educacional Municipal o Servicio Local de Educación a los profesionales de la educación parvularia, básica o media que, al 31 de julio de 2018, se encontraren incorporados a ella en calidad de contratados y que se hayan desempeñado como docentes de aula en la misma durante, a lo menos, tres años continuos o cuatro años discontinuos, por un mínimo de veinte horas cronológicas de trabajo semanal. La titularidad de las horas a contrata operará sólo respecto



de aquellas contratadas en aula y sus correspondientes horas no lectivas”.

Por lo que se puede deducir a ciencia cierta es que existe una discriminación positiva en el Estatuto Docente, que permite diferenciar estamentos contractuales vigentes en las dotaciones docentes municipales o de los nuevos Servicios Locales de Educación, en tanto no se cumplan requisitos para acceder a la titularidad por parte de los docentes a contrata. Se puede ciertamente argumentar que la titularidad docente constituye una **ASPIRACION DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO PARA EL DOCENTE QUE HA TRABAJADO POR AÑOS BAJO LA**

**FIGURA DE CONTRATOS A PLAZO FIJO**, constituyendo una larga lucha gremial sostenida por los docentes al respecto.

Volviendo al contenido normativo del art. 41 bis ya invocado por el recurrente, la Contraloría General de la República, Organismo fiscalizador de la actividad administrativa municipal, ha precisado reiteradamente que el beneficio de prórroga que establece el citado artículo 41 bis del Estatuto Docente, solo favorece a los educadores incorporados a la dotación como contratados y que satisfagan las exigencias del caso, por lo que no les resulta aplicable a aquellos docentes que cumplan funciones en calidad de titulares. (Aplica criterio contenido entre otros, en dictámenes N° 58.183, de 2012 y N° 56.188, de 2016). En tal contexto, y pronunciándose precisamente respecto de la situación de los docentes que se han acogido a retiro voluntario, ha señalado que “los profesionales de la educación que, perteneciendo a una dotación docente en carácter de titulares, cesen en sus funciones por cualquiera causal legal y aun cuando su alejamiento se verifique el 31 de diciembre o en una fecha posterior que medie entre los meses de enero y febrero del año siguiente, no tienen derecho al beneficio contemplado en el referido artículo 41



bis.”

De la calidad jurídica docente demandantes se deduce que todos tenían calidad de Titulares en la dotación docente comunal de Padre las Casas en la Educación Municipal.

Que, al mismo tiempo, al acceder a los beneficios del incentivo al retiro, CON INDEMNIZACIONES ESPECIALES ADICIONALES A LAS DE SUS FUNCIONES DOCENTES, establecidas por ley N°20.822 y N°20.796, obligaba a sus beneficiarios a cesar IPSO FACTO en el sistema educativo municipal o la respectiva dotación docente.

Hay que destacar que, estas normas de incentivo al retiro son justamente para estimular la salida de docentes de antigua data en el sistema que, atendido la especial forma de término de sus servicios se les indemniza con montos atractivos de dinero; por ende, carece de razonamiento lógico y jurídico el hecho de que pretendan hacer pervivir sus calidades de docentes titulares más allá de lo que la propia ley de incentivo al retiro autoriza.

Si se razonara en sentido inverso significaría burlar el espíritu de la ley e inducir al sostenedor educacional de la época (Municipalidad), a una eventual malversación de caudales públicos o efectuar una aplicación pública diferente de recursos destinados a los establecimientos educacionales, (subvenciones), donde se incluyen naturalmente las remuneraciones docentes.

Que, la Ley N°19.933/2004, que crea este beneficio contemplado en el art. 41 bis del Estatuto Docente, viene a corroborar que fue establecido para una categoría de docente que sufría incertidumbre sobre su permanencia laboral en los sostenedores municipales, CUANDO SUS CONTRATOS A PLAZO FIJO EXPIRABAN REGULARMENTE EN DICIEMBRE 30 DE CADA AÑO. Por lo que el legislador, tomando la situación ya resuelta en los establecimientos particulares, adapta el mecanismo de reconocer la prórroga de los CONTRATADOS (NO TITULARES) PARA



LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO SUBSIGUIENTE, entendiendo que la incertidumbre sobre continuidad laboral se trasladaba al mes de marzo del nuevo año escolar. Así, la historia de la ley N°19.933/2004 lo refleja:

d. Prórroga del contrato. En cuarto lugar, y obedeciendo a un principio de equidad, se hace extensivo a los profesionales de la educación municipal un beneficio del que gozan los docentes de la educación particular en orden a que se les asegure su prórroga de contrato por los meses de vacaciones de enero y febrero, cuando tengan en el mes de diciembre más de seis meses continuos de servicio al mismo sostenedor municipal. (Historia de la Ley N° 19.933 Página 6 de 75 Mensaje)

De esta manera y de un modo evidente, la sentencia que aquí se reprocha, no aplicó la normativa legal que servía para resolver el conflicto de autos. Veamos sus consideraciones pertinentes:

NOVENO: Que el resto de los antecedentes probatorios rendidos, incorporados y no pormenorizados, en nada alteran lo concluido precedentemente.

Y visto además lo dispuestos artículos 446 del Código del Trabajo, artículos 1 y 3 de la ley 20.976, artículo 4 ley 20.822 y artículo 41 bis del DFL n° 1, SE RESUELVE

I.- Que SE ACOGE la demanda interpuesta por don RUBEN ALVARO SILVA MORA, cedula nacional de identidad número seis millones quinientos doce mil ciento cuarenta y seis guion ocho, don VICTOR GALARCE FUENTES, cedula de identidad número siete millones veintidós mil setecientos cuatro guion cinco y doña ERIKA DEL CARMEN SAN MARTIN CAMPOS, cedula de identidad número ocho millones cuatrocientos treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta y seis guion seis, en contra de la Ilustre Municipalidad de Padre Las Casas, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por su alcalde don Mario Hernán González Rebolledo y en consecuencia se ordena a la demandada a pagar a los actores ya



individualizados las remuneraciones de los meses de enero y febrero cuyo total se indica en cada caso:

Don RUBEN ALVARO SILVA

MORA: \$3.050.896 Don VICTOR

GALARCE FUENTES: \$2.656.696

Doña ERIKA DEL CARMEN SAN MARTIN CAMPOS: \$3.712.412

II.- Que las referidas cantidades serán reajustadas y devengarán intereses en la forma prevista en el artículo 63 del Código del Trabajo

III.-Se condena en costas a la demandada por resultar completamente vencida y se fijan estas prudencialmente en la cantidad de \$400.000.-

Entonces VS., reiterando lo señalado anteriormente, la premisa por la cual parte este análisis es errada de un principio, ya que el tribunal ad-quo, establece mediante la redacción del fallo, que mi representada, pudiese obrar de manera distinta a la que establece la ley, y es precisamente aquí SS., donde se produce la infracción de ley alegada como vicio, ya que, es la aplicación del artículo 41 bis del estatuto docente, la que entrega el marco de acción a mi representada, por lo cual, de obrar de otra manera mi representada al ser un organismo público descentralizado pero regido por normas expresas y que establecen de manera categórica la conformación de los profesores titulares y contratados de cada servicios público como es la MUNICIPALIDAD, es el mismo quien tiene la respuesta de justificación del obra de mi representada.

Pero el yerro de la sentencia explicado recién, fue acompañado de otro de entidad no menor, cual es el asumir que la solución de la cuestión debatida hay que encontrarla en la aplicación de un principio, que si bien pudiese esclarecer ciertos pasajes oscuros de derecho y más detenidamente en la interpretación de este, no es menos cierto que la aplicación de este principio por sobre la normativa regulatoria, es decir por sobre texto expreso y la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la



República, en el sentido de entender que sólo a profesores a contrata, contratados o con contrato se les prorroga su contrato por enero y febrero, indefectiblemente hubiese concluido en que la decisión de Municipalidad de Padre las Casas, se encuentra plenamente ajustada a derecho, de lo contrario y como falla el Sentenciador, consecuentemente sobrepone a mi representada en un escenario de ilegalidad, ya que no estaría respetando su normativa específica como tampoco la Constitución política de la República, al excederse de sus atribuciones emanadas de la Ley.

Influencia sustancial en lo dispositivo del fallo:

Resulta evidente que, de haber interpretado adecuadamente la sentenciadora la norma contenida en el artículo, habría debido considerar para su análisis y resolución final, que aquellas normas que prorroga por enero y febrero el contrato de los profesores a contrata, es específica para ellos, lo que implícitamente lleva a concluir que el actuar de mi representada como ente público descentralizado, se encuentra ajustado a derecho.

Asumido lo anterior y dado que la demanda de autos es una demanda por cobro de los meses de enero y febrero de 2022, realizada por profesores que tenían calidad de titulares, debió rechazarla de plano al no fundarse en una hipótesis derivada de la aplicación de las normas legales y reglamentarias recién citadas, es decir que no se encontraba en la hipótesis de ser a contrata o transitorios dependientes de la Municipalidad.

Al no fundarse la demanda en ninguna de estas alternativas, sino en una inconciliable con la correcta interpretación de las normas en comento, la demanda debió ser rechazada por completo, siendo entonces el yerro interpretativo del sentenciador uno de calibre tal que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

2.- Infracción a los artículos 19 inciso 1º y 22 inciso 1º del Código Civil: Estas disposiciones legales disponen: “Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar





su espíritu”. (Art. 19 inciso 1º Código Civil) “El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía”.

(Art. 22 inciso 1º Código Civil) Veamos sus consideraciones pertinentes, con la prevención que se dan por reproducidos los mismos considerandos transcritos en el punto 1, transcribiéndose ahora únicamente, dentro de aquellos, los que resultan directamente referidos:

La ley que auxilia al juzgador en su tarea interpretativa no deja lugar a dudas: en aquellos casos en que el tenor de la ley es claro, no cabe desatender dicho tenor bajo la pretensión o pretexto de buscar su espíritu.

Artículo 41 bis de la Ley 19.070 que dispone:

Los profesionales de la educación **CON CONTRATO VIGENTE AL 1 DE DICIEMBRE**, tendrán derecho a que éste se prorrogue por los meses de enero y febrero o por el periodo que medie entre dicho mes y el día anterior al inicio del año escolar siguiente, siempre que el profesional de la educación tenga más de 6 meses continuos de servicios para el mismo municipio.

Artículo 25 de la Ley 19.070 que dispone:

Los profesionales de la educación se incorporan a una dotación docente en calidad de titulares o en calidad de contratados.

Son titulares los profesionales de la educación que se incorporan a una dotación docente previo concurso público de antecedentes.

Tendrán calidad de contratados aquellos que desempeñan labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titulares.

Ante tal claridad del tenor de las normas citadas en el párrafo anterior, el juzgador, por expreso mandato del artículo 19 inciso 1º del Código Civil, debió estarse a él y aplicarlo al caso sometido a su consideración en estos autos, sin embargo, contrariando dichas normas acudió en búsqueda de espíritu normativo y contexto de la norma,



desbordando los límites legales para, finalmente encontrar su fundamento normativo (soslayando por un momento lo indebido de su proceder) no en una o más disposiciones legales, sino la interpretación que el mismo da de lo que se considera habitual, desoyendo lo estipulado por la Ley, dado que, ella misma señala los casos específicos que debe contratarse bajo el Código del Trabajo; como también de la doctrina de la Contraloría General del República, ente destinado a la fiscalización de los organismos del Estado como también de los servicios descentralizados como es el caso de la Municipalidad de Padre las Casas.

Influencia sustancial en lo dispositivo del fallo:

Si el juzgador hubiera interpretado correctamente la norma del artículo 41 bis de la ley 19070, conllevaría a la imposibilidad de la pretendido por el Juez Ad-quo de generar una interpretación de que la normativa que regula la función pública tiene el mismo rango legal que el Código del Trabajo, cuerpo normativo al que él juez recurrido, pretende revestir de un carácter “supra-normativo” y con ello lograr su preeminencia por sobre las disposiciones de Derecho Público, que regulan a los órganos del estado como mi representada, olvidando de manera deliberada la estructura de nuestro ordenamiento jurídico.

Es decir, se habría rechazado la demanda por no cumplir los requisitos que exige la ley para proceder al pago de los meses de enero y febrero, esto es, ser profesores contratados o a contratas, ya que en este caso eran profesores titulares-

Finalmente solicita tener por interpuesto en tiempo y forma recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva de fecha 9 de junio de 2022, declararlo admisible y elevarlo para ante la Ilustre Corte de Apelaciones de Temuco, a fin de que dicho Ilustrísimo Tribunal, conociendo del presente recurso, lo admita a tramitación, lo acoja y declare nula la sentencia recurrida, dictando otra de reemplazo mediante la cual y en mérito de lo expuesto y normas legales invocadas, rechace la demanda de autos en todas sus partes,



declarando que no se deben pagar los meses de enero y febrero de 2022 a los profesores demandantes, todo lo anterior con expresa condena en costas.

**CONSIDERANDO:**

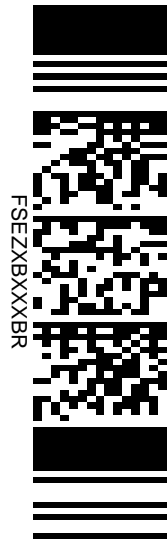
**PRIMERO:** Que, en estos antecedentes el recurrente invoca como causal única la del artículo 477 del Código del Trabajo, ello porque según su parecer el sentenciador hizo una errónea aplicación del derecho y ello influyó sustantivamente en lo dispositivo de la sentencia, lo que consecuentemente significó conceder lo demandado por los actores de estos antecedentes.

**SEGUNDO:** Que, el recurrente considera que la referida interpretación no es la correcta, atento los antecedentes que señala, particularmente el hecho que los demandantes no detentaban la calidad de profesores titulares , ya que se acogieron al beneficio de retiro voluntario contemplado en el artículo primero de la ley 20.976, beneficio que se otorga siempre que ellos comuniquen su decisión de renunciar voluntariamente y hagan efectiva dicha renuncia respecto del total de horas que sirven, en los plazos que fija la ley.

**TERCERO:** Que conforme lo anterior el sentenciador se refiere en primer lugar si a los si a los demandantes les corresponde el pago de las remuneraciones de los meses de enero y febrero del año 2022 en atención a lo dispuesto en el artículo 41 bis del DFL N°1 del año 1997 del Ministerio de Educación. Ello es analizado en el considerando sexto de la sentencia, para lo que cita la norma indicada, señalando además que este artículo está inserto en el título IV del estatuto docente, esto es de la

dotación docente y el contrato de los profesionales de la educación del sector municipal y dentro del párrafo tercero: derechos del personal docente. Luego señala que no fue debatido que los actores estaban designados como docentes titulares para la Municipalidad de Padre las Casas.

**CUARTO:** Que el sentenciador seguidamente procede a citar la



legislación aplicable para el caso concreto que nos interesa, particularmente el artículo 1 de la Ley 20.976 que permite a los profesionales de la educación que indica, entre los años 2016 y 2025 acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley 20.822. Luego cita el artículo 3 de la misma Ley que establece: "A los profesionales de la educación que accedan a un cupo de la bonificación por retiro voluntario se les aplicará lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 20.822". En ese sentido procede a señalar que la Ley 20.822 que otorga a los profesionales de la educación que indica una bonificación por retiro voluntario, dispone en su artículo 4: Artículo 4°.- Los profesionales de la educación que, a las fechas señaladas en el artículo 2°, se encuentren en la situación descrita en los artículos 41 bis u 82 del decreto con fuerza de ley N°1, de 1997, del Ministerio de Educación, mantendrán su derecho a prórroga de la relación laboral y al pago de sus remuneraciones por el período en que estas últimas disposiciones señalan.

**QUINTO:** Luego el sentenciador en el considerando octavo de su sentencia analiza en cuanto conjunto la normativa citada, así como la descripción fáctica de la causa, concluyendo "Que del análisis de la normativa recién expuesta, en el caso de los actores, quienes se acogieron a la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley 20.822, cuyos contratos se encontraban vigentes a diciembre de 2021 tal como reconocieron los testigos de la demandada, que los actores estaban designados como docentes titulares para la Municipalidad de Padre las Casas, más de seis meses continuos de servicios para el mismo municipio, se desprende que se reúnen los requisitos previsto en el artículo 41 bis del DFL n°1 que Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley n° 19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican en relación con el artículo 4 de la ley 20.822, por lo que se hace procedente acoger la demanda en la forma solicitada, disponiendo el pago de las remuneraciones de los meses de enero y



febrero de 2022 a cada uno de los actores, conforme a la liquidación de remuneraciones del mes de diciembre de 2021 de cada uno de ellos don Rubén Silva Mora: \$1.525.448, don Víctor Galarce Fuentes: \$1.328.348 y doña Erika Del Carmen San Martín Campos: \$1.856.206.”

**SEXTO:** Que esta Corte concuerda con el razonamiento realizado por el sentenciador, en cuanto aplicó correctamente las normas legales para el caso concreto, dándole el sentido y alcance que el legislador tuvo en vistas al momento de dictarla, sin que se pueda percibir como lo reclama el recurrente una errada interpretación de ella y que de ella se derive perjuicio para él. Tal como se indicó, la norma fue aplicada en el sentido y alcance que corresponde, sin que pueda reprocharse de la forma solicitada, siendo correcta la conclusión a la que arriba, motivo por el cual el recurso será rechazado y consecuentemente la sentencia confirmada.

Y visto además lo dispuesto en el artículo 477, 482 del Código del Trabajo, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de nulidad deducido por la parte demandada, en los autos laborales caratulados “Barrientos con I. Municipalidad de Temuco, RIT O-194-2022, contra la sentencia definitiva de nueve de junio de dos mil veintidós dictada por la jueza doña Marta Paola Álvarez Basáez, del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, la que en consecuencia no es nula.

Regístrese e incorpórese en su oportunidad en la carpeta digital.

Redacción del Abogado Integrante don Reinaldo Osorio Ulloa.

Laboral - Cobranza-257-2022.(fcv)

Jose Hector Marinello Federici  
MINISTRO(P)  
Fecha: 06/10/2022 12:46:48



FSEZBXXXBR

Proveído por el Señor Presidente de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco. Se hace presente que el Fiscal Judicial Sr. Óscar Viñuela Aller y el abogado integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa, no firman, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo respectivo, por encontrarse con comisión de servicio y ausente, respectivamente.

En Temuco, a seis de octubre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



C.A. de Temuco

Temuco, trece de octubre de dos mil veintidós.

Al folio N° 20: Estese a lo que se resolverá.

**Vistos:**

Habiendo incurrido este Tribunal en un error de transcripción en la sentencia definitiva de fecha seis de octubre del año dos mil veintidós, y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 182 del Código de Procedimiento Civil, se rectifica la misma en el sentido de reemplazar, en su parte resolutive, la frase “Barrientos con I. Municipalidad de Temuco”, por “Oyanader con Ilustre Municipalidad de Padre Las Casas”, manteniéndose inalterada en todo lo demás.

Téngase la presente resolución como parte integrante de la sentencia dictada para todos los efectos legales.

Rol N° Laboral - Cobranza-257-2022.(jog)

Maria Georgina Gutierrez Aravena  
MINISTRO  
Fecha: 13/10/2022 15:15:32

Juan Bladimiro Santana Soto  
FISCAL  
Fecha: 13/10/2022 11:54:04

Reinaldo Alberto Osorio Ulloa  
ABOGADO  
Fecha: 13/10/2022 15:22:05



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco integrada por Ministra Maria Georgina Gutierrez A., Fiscal Judicial Juan Bladimiro Santana S. y Abogado Integrante Reinaldo Alberto Osorio U. Temuco, trece de octubre de dos mil veintidós.

En Temuco, a trece de octubre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

